



COMISIÓN ESTATAL  
**DERECHOS  
HUMANOS**  
NUEVO LEÓN

En la ciudad de Monterrey, capital del estado de Nuevo León, a los 27-veintisiete días del mes de septiembre de 2012-dos mil doce.

**Visto** para resolver el expediente número **CEDH/121/2012**, relativo a la queja presentada por el Sr. \*\*\*\*\*, respecto de actos que estimó violatorios a sus derechos humanos, cometidos presuntamente por **elementos de la Policía Ministerial de la Agencia Estatal de Investigaciones**; y considerando los siguientes:

## I. HECHOS

1. Queja del Sr. \*\*\*\*\*, de fecha 31-treinta y uno de enero de 2012-dos mil doce, levantada por personal de éste organismo y en la que se manifiesta esencialmente lo siguiente:

*(...) El día 25-veinticinco de enero de 2012-dos mil doce, aproximadamente a las 9:00 horas, acudió con su amigo \*\*\*\*\*, al depósito que se encuentra en el cruce de las calles Monte Cristal y San Roque de la colonia Monte Cristal, en el municipio de Juárez, Nuevo León. Al descender de su camioneta, escuchó que gritaron "policía ministerial, tírense al suelo"; se tiró al suelo junto con su amigo \*\*\*\*\*, y cuando estaban en el piso, observó que aproximadamente 4-cuatro personas de sexo masculino les apuntaban con armas largas y le colocaron el pie en la cabeza, indicándoles "no vayan a voltear". En virtud de lo anterior no puede describir a los policías ministeriales que le apuntaban con las armas.*

*Posteriormente lo levantaron del suelo y le dieron la orden de que subiera a un vehículo, del cual recuerda era un Malibú dorado. No se le informó el motivo de su detención ni se le mostró orden legal alguna que justificara su detención; tampoco se le indicó a dónde lo trasladaban y de igual forma no había cometido delito alguno que justificara su detención.*

*Una vez arriba del vehículo Malibú, le colocaron unas esposas con las manos hacia la espalda, y el vehículo emprendió la marcha. Después de aproximadamente 40 minutos, el vehículo se detuvo, agregando que durante el traslado le fue vendada el área de los ojos, por lo que en ese momento desconocía a dónde había sido llevado. En el lugar al que fue llevado subió y bajó varias escaleras, después le quitaron las esposas y le*

ordenaron se quitara la ropa, agregando que se quedó solamente en bóxer.

Después le vendaron también los brazos, entrelazándoselos por la espalda, y escuchó que le decían "ahorita vas a ver"; a lo que les respondió "pues yo qué señor, yo solamente iba por unas cervezas"; refiriéndole "no te hagas pendejo". Acto seguido comenzaron a agredirlo con un objeto duro que cree era una tabla o un bat, propinándole aproximadamente 10-diez golpes en la cabeza; intentó levantarse del suelo, pero le propinaron un golpe en la espalda con el objeto duro y le indicaron "no te levantes culero, no te levantes", tumbándolo nuevamente al suelo.

Posteriormente sintió que se subieron en su pecho, ya que sentía como si fueran las rodillas de una persona, y le abrieron las piernas; acto seguido le propinaron 4-cuatro golpes en sus genitales, con el objeto duro. Posteriormente, con lo que cree era un cinto, le sujetaron los pies y le refirieron "¿qué quieres, agua o bolsa?", a lo que no les respondió nada y le indicaron "bueno ahorita vas a ver para que pruebes las dos cosas".

Comenzaron a vaciarle agua sobre su rostro, directo a su boca y nariz, por lo que sentía que se ahogaba, escuchaba que se reían. Le vaciaron agua sobre su boca y nariz en 4-cuatro ocasiones, durando cada una de ellas 1-un minuto, después le colocaron una bolsa de plástico en la cabeza, al mismo tiempo que brincaban sobre su pecho, ya que sentía los zapatos de las personas que se le subían, agrega que la bolsa se la colocaron en 6-seis ocasiones, sin poder precisar cuánto tiempo le dejaban la bolsa sobre su cabeza y se la apretaban del cuello, pero recuerda que se la dejaban hasta que empezaba a temblar, ya que no podía respirar.

Cada vez que le quitaban la bolsa le decían "¿dónde está?, ¿dónde está? tú fuiste el que quemaste al de la camioneta roja", y les respondía "no, yo no sé nada de eso, yo soy mecánico, tengo mi taller en la casa, si quieren los llevo para que vean"; así mismo le refirieron ¿dónde están los de la camioneta negra, en dónde está la camioneta negra?, a lo que les respondió "yo no sé nada, yo tengo una camioneta Cheyenne, está en mi casa, es con la que se mueve mi esposa para ir al mercado, porque vende ropa"; también le refirieron "no te hagas güey, en dónde están los pelados de la camioneta negra", a lo que les respondió "no sé de qué me habla".

Después de una hora y media lo dejaron de golpear, ya que lo llevaron a una oficina, en donde desconoce de qué autoridad se trataba. Durante el traslado le quitaron las vendas y observó que era una persona de sexo masculino, con chaleco de la A.E.I. y capucha en la cabeza, quien le indicó "mira, vas a decir que eres halcón y que tú venías con \*\*\*\*\*, con \*\*\*\*\* y con \*\*\*\*\*", y si no ahorita paro la entrevista y vas a

ver". Por temor a que lo fueran a agredir de la forma ya descrita señaló lo que le habían indicado que dijera.

No tuvo abogado ni de oficio ni particular y sólo se limitó a declarar lo que le indicaron que dijera. Después lo llevaron a otra oficina en donde permaneció sentado en el suelo. En ese momento se percató que se encontraba en la Agencia Estatal de Investigaciones, ya que había letreros; y posteriormente escuchó que era la de Gonzalitos.

Empezó a sentirse mal por los golpes que le habían propinado, sintiendo que perdía el conocimiento por lo que fue trasladado al Hospital Universitario; menciona que era por la noche o madrugada. Permaneció en dicho hospital aproximadamente 3 horas, ya que le practicaron estudios de rayos "x", eco y le pusieron suero. Sólo recuerda que de los ministeriales que lo trasladaron, uno era chaparrito y güero; y el otro era alto y moreno.

Después de que regresó a la policía ministerial de Gonzalitos, lo ficharon, tomándole fotografías y huellas de sus dedos. Posteriormente lo ubicaron en una celda, aclarando que solicitó se le proporcionara un teléfono para hablar con su familia pero se le negó. Aclara el deponente que volvió a ver a su amigo \*\*\*\*\* cuando declaró.

Permaneció en una celda hasta el día 27-veintisiete de enero, ya que siendo aproximadamente las 12:00 horas lo sacaron, y el mismo ministerial que días antes le había dicho qué declarara, lo trasladó a una oficina. Lo reconoció por la voz, ya que estaba también encapuchado, y le volvió a indicar "para que te acuerdes bien", y le pegó 4-cuatro veces en el estómago con los puños cerrados, refiriéndole "a ver si le cambias algo". Los golpes se los propinó en el interior de un baño.

Ya en la oficina, una persona de sexo masculino, la cual no se identificó, le mostró la anterior declaración y le dijo "ésta ya no va a jalar, ésta va a ser la buena". Le refirió a dicha persona, la cual tiene las siguientes características: de 1.70 metros de estatura aproximada, complexión delgada, tez blanca, cabello escaso, de aproximadamente 35 años de edad, que había sido amenazado por el ministerial que se encontraba afuera de la oficina. Dicha persona le respondió: "pues como quieras, si quieres la cambio, pero yo no sé, yo termino y me voy, y tú te quedas". Al escuchar lo anterior le respondió "no, pues entonces póngale lo que quiera, porque los trancazos están bien buenos y la verdad ya no los voy a aguantar". No tuvo abogado, y después de lo anterior firmó los papeles que le dieron.

Aproximadamente a las 18:00 horas de ese día 27-veintisiete de enero de 2012-dos mil doce, se le trasladó al Centro Preventivo de Reinserción Social "Topo Chico", en donde sabe se encuentra a disposición del

*Juzgado de Preparación Penal en Cadereyta Jiménez, Nuevo León, por el delito de delincuencia organizada.*

*Se hace constar que presenta equimosis en costado izquierdo parte baja. Refiere que a raíz de los hechos antes narrados, ha tenido pesadillas y se levanta sudando y exaltado.*

*Indica que su pretensión con la iniciación del procedimiento es que se investiguen los hechos antes narrados para que se sancione a los ministeriales, ya que no quiere que le pase a otra persona. (...)*

2. En atención a la anterior queja, la **Tercera Visitaduría General** de este organismo, dentro del presente expediente, admitió la instancia y calificó los hechos como presuntas violaciones al Sr. **\*\*\*\*\***, atribuibles presuntamente a **elementos de la Policía Ministerial de la Agencia Estatal de Investigaciones** y consistentes en: **violaciones al derecho a la libertad y seguridad personales, integridad personal y seguridad jurídica.**

Se notificó la instancia a las partes, se solicitó informes documentados y se inició la investigación respectiva para obtener las siguientes:

## II. EVIDENCIAS

Además de las comparecencias referidas en el título de HECHOS, en el expediente se encuentra lo siguiente:

1. Oficio número 1934/2012, recibido por este organismo en fecha 17-dieciséis de agosto del año 2010-dos mil diez, signado por el **Juez Penal y de Preparación Penal del Quinto Distrito Judicial del Estado**, en el que anexa copia certificada del proceso penal **\*\*\*\*\***. Este organismo destaca los siguientes autos como evidencias:

a) Parte informativo ministerial que firmó el **detective \*\*\*\*\*** y recibió el **Agente del Ministerio Público Investigador en Turno del Quinto Distrito Judicial en el Estado** el 26-veintiséis de enero de 2012-dos mil doce, mismo que a continuación se transcribe:

*"[...]Por medio del presente escrito me permito informar a Usted, que siendo el día de hoy 25 de enero del año en curso, siendo las 14:35 horas un convoy de unidades de esta corporación se trasladaron al Municipio de Juárez y Guadalupe Nuevo León en un operativo para checar diversos corralones ubicados en dichos Municipios, por lo que al circular sobre los diversos puntos a revisar, los compañeros de la citadas unidades se percataron que en un lapso de cuarenta minutos los venían siguiendo dos vehículos, el primero siendo un chevrolet tipo Aveo y una camioneta atipo*

Caravan, observándose varios sujetos del sexo masculino abordó en ambos vehículos, por lo que al llegar a la Carretera a Reynosa en su cruce con la Carretera a San Roque en el municipio de Juárez Nuevo León, se les marco el alto a los dos vehículos en mención, siendo el primero marca chevrolet, tipo Aveo, en color negro con placas de circulación \*\*\*\*\* del estado de Nuevo León con número de serie \*\*\*\*\* y una Camioneta marca Chrysler tipo Caravan Blanca con placas de circulación \*\*\*\*\* del Estado de Nuevo León con número de serie \*\*\*\*\*; inmediatamente los agentes ministeriales \*\*\*\*\* y \*\*\*\*\* se avocaron a la investigación del vehículo Caravan y sus ocupantes y los compañeros ministerial JUAN \*\*\*\*\* y \*\*\*\*\* se avocaron a la investigación del vehículo Aveo y a sus ocupantes, por lo que los primeros mencionados checaron en la planta de radio de esta corporación resultando que el Aveo no tiene ningún reporte, mas sin embargo aparece como vehículo recuperado, es decir que anteriormente fue robado y de los hechos existe un expediente en el Juzgado del Quinto Distrito Judicial en el Estado con número \*\*\*\*\*; así mismo los elementos \*\*\*\*\* y \*\*\*\*\* verificaron del mismo modo las placas que portaba la camioneta Caravan resultando que pertenecen a un Vehículo tipo Aveo modelo 2010 a nombre de \*\*\*\*\* con domicilio en la calle \*\*\*\*\*.

Al tener su marcha los vehiculos mencionados y abordar a las personas que venían en su interior se logro escuchar que todos los ocupantes venían hablando por aparatos nextel y celulares, donde les preguntaban a los ahora detenidos que por donde andaban circulando el convoy de los "MISTI", refiriéndose a los Policías ministeriales y cual era la ubicación exacta del convoy de las unidades de la Ministerial, por lo que se abocaron los agentes \*\*\*\*\* y \*\*\*\*\* a hacer la revisión y detención de los mismos logrando entrevistar a los ocupantes del vehiculo Aveo el cual era tripulado por:

El C. \*\*\*\*\* alias "\*\*\*\*\*", de 21 años, unión libre, originario de monterrey, con fecha de nacimiento 7 de septiembre de 1990 y con domicilio en la calle \*\*\*\*\* desconociendo el número, en la colonia \*\*\*\*\*. Quien conducía el vehiculo mencionado, además de referir que trabaja para \*\*\*\*\* realizando las labores de \*\*\*\*\*; mismo que realiza esto desde hace tres meses recibiendo actualmente un pago de \$4,800 por quincena, siendo el día de ayer a las 11:00 horas cuando recibió dicho pago, mencionando además que su jefe inmediato es una persona de apodo el "\*\*\*\*\*" el cual tripulaba la camioneta Caravan color blanco.

Refiriendo también que su punto de \*\*\*\*\* es en la tienda de autoservicio "\*\*\*\*\*" el cual se encuentra enfrente del monumento de Benito Juárez por la carretera a Reynosa. Menciona que no recuerda el

día, pero que el \*\*\*\*\* el cual es su relevo del punto, le dijo que había visto en las noticias que él \*\*\*\*\* el cual es encargado del municipio de Guadalupe, andaba en la zona y que este había quemado una camioneta tipo Cheyenne sin decirle en que lugar, que el motivo por el cual había hecho eso era porque las personas que iban a bordo de dicha camioneta le habían dicho cosas al \*\*\*\*\*.

Menciona también que hace seis meses renunció a su trabajo en la bodega de S-MART y una semana después entró a laborar como empleado del municipio de Juárez Nuevo León en el departamento de auxilio vial refiriendo que el jefe de auxilio vial al cual conoce como "\*\*\*\*\*" le entregó un nextel y le dijo que iba a "jalar para la compañía, que lo que le pidieran se los diera" y que inicialmente le iban a pagar \$ 6,000 al mes, mencionando que en una ocasión acudió a un monte en donde se encontraba una camioneta tipo lobo en color blanca la cual era tripulada por cuatro personas, 2 del sexo masculino y 2 de sexo femenino, para hacerles un cambio de llanta de la camioneta y que en esa ocasión estuvo acompañado por su hermano de nombre \*\*\*\*\* alias el \*\*\*\*\*.

Así mismo refiere que en la segunda ocasión acudió a la colonia Héctor Caballero a abastecer con gasolina en un Ecotaxi verde el cual era tripulado por una persona de la cual sabe le apodan \*\*\*\*\* , siendo este una persona del sexo masculino de 30 años aproximadamente, complexión media, chaparro, tez morena y cabello corto normal; y tres personas más las cuales no alcanzó a observar, mencionando que la gasolina la sacó de una de las patrullas que se encuentran en la demarcación de policía misma que se ubica al lado de la estación de bomberos lo anterior por ordenes de su \*\*\*\*\* , llenando una garrafa de 20 litros y llevándola al lugar donde le habían iniciado, refiere que esa ocasión acudió el entrevistado, solo a entregar la gasolina, siendo todo lo que manifestó hasta el momento.

Hace mención que el entrevistado portaba consigo un aparato tipo nextel marca Motorola modelo i 335 color negro y sin la tapa de pila y aparato celular marca Nokia Modelo 6131 color gris mencionando que el número es el \*\*\*\*\* , de los cuales segundos antes de su detención informaba a su jefe la ubicación exacta de las unidades policíacas antes descritas.

\*\*\*\*\* alias "\*\*\*\*\*", 18 AÑOS, soltero, originario de \*\*\*\*\* , con fecha de nacimiento \*\*\*\*\* con domicilio en la Calle \*\*\*\*\* ya que no recuerda el número exacto y de ocupación ayudante de fotógrafo.

El cual iba en el asiento del copiloto y al entrevistado refiere que labora \*\*\*\*\* desde hace aproximadamente 3 meses realizando labores de

\*\*\*\*\* esto a través de un aparato celular a un contacto al cual conoce como la \*\*\*\*\* únicamente y por esta labor percibe un sueldo de 4,800 por quincena, y dicho pago lo recibía parte de \*\*\*\*\* del cual no sabe su nombre ni apodo solo lo ubica por que es güero, de aproximadamente 1.70 de estatura, de complexión robusta y de pelo corto-. Así mismo menciona que su punto de \*\*\*\*\* era uno conocido como "\*\*\*\*\*", el cual esta ubicado sobre la carretera a Reynosa en el municipio de Juárez.

Se hace mención que al entrevistado se le encontró una aparato de radiocomunicación tipo Nextel marca Motorola modelo 1570 color Negro el cual usa para realizar las funciones de \*\*\*\*\* . Y al cuestionarle sobre su participación en otros hechos delictivos refiere que solo se dedica a realizar labores de halconeo para dicho grupo delictivo sin tener participación en ningún otra actividad.

\*\*\*\*\* alias "\*\*\*\*\*", de 32 años, de estado civil soltero, ORIGINARIO DE \*\*\*\*\* , con fecha de nacimiento \*\*\*\*\* y con domicilio en la calle \*\*\*\*\*.

El cual iba en el asiento trasero del vehículo y mismo que menciona que desde hace aproximadamente 8 meses labora para \*\*\*\*\* realizando labores de \*\*\*\*\* , en un punto denominado punto ocho el cual se encuentra en el cruce de las Avenidas Eloy Cavazos y Carretera a San Roque y sus funciones consistían en \*\*\*\*\* todo esto se lo \*\*\*\*\* a un contacto que estaba grabado en el aparato nextel que le era entregado en cada turno y el cual es "\*\*\*\*\*" y que por tal servicio percibía un sueldo de 4,800 por quincena sueldo que le era entregado por una persona de sexo masculino el cual le indicaba que se arrimara a la tienda conocida como SORIANA San Roque y ahí le era entregado su sueldo, menciona que no conoce a la persona que le entregaba dicha cantidad pero refiere que la persona que lo metió a trabajar es una persona de sexo masculino de aproximadamente 25 años, de 1.60 de estatura, de complexión delgada y el cual es apodado "\*\*\*\*\*", mismo que sabe es encargado de \*\*\*\*\* y se mueve en una Pick Up color roja, marca Chevrolet modelo 91 o 92.

Mismo que al ser detenido portaba un aparato Nextel Motorola color gris con azul el cual el fue entrado por el "\*\*\*\*\*" para realizar sus funciones. Así mismo al cuestionarle su participación en otros hechos delictivos dice desconocer que actividades realizan ya que el solo se dedica a realizar labores de halconeo.

Así mismo los elementos ministeriales \*\*\*\*\* y \*\*\*\*\* se aproximaron a la Camioneta Caravan y en su interior se encontraban cuatro personas de sexo masculino los cuales en ese momento

escucharon cuando estaban hablando por radio y teléfonos celulares, alcanzando a escuchar que daban indicaciones sobre su ubicación y que los habían alcanzado, al referir las siguiente frase " YA NOS DETUVIERON LOS MISTI, ESTAMOS EN EL ENROQUE DE SAN ROQUE Y AHORA QUE" , por lo que procedieron a detener a las cuatro personas las cuales responden a los nombres de:

El vehículo era conducido por quien dijo responder al nombre de \*\*\*\*\* alias el "\*\*\*\*\*" y/o "\*\*\*\*\*", de 26 años, casado, originario de \*\*\*\*\* , de oficio mecánico eléctrico automotriz y disel y con domicilio en la calle \*\*\*\*\*.

Quien refiere que lleva 5 meses aproximadamente trabajando para \*\*\*\*\* desempeñándose como encargado de \*\*\*\*\* recibiendo la cantidad de 4,800 pesos por quincena y que la persona quien tiene su cargo a todos los \*\*\*\*\* del municipio de Benito Juárez N.L. es una persona de la cual solo sabe le apodan el "\*\*\*\*\*" siendo este una persona de aproximadamente 28 a30 años de complexión delgada, alto, güero y de pelo a rapa, así mismo y continuando con al entrevista refiere que tiene a su cargo a tres personas de apodos, el "\*\*\*\*\*", \*\*\*\*\* y \*\*\*\*\*" los cuales se encuentran en los siguientes puntos el primero de ellos se encuentra en el punto de "\*\*\*\*\*" el cual se encuentra en los Ebanitos y la carretera Reynosa, el segundo se encuentra en el monumento mismo que se encuentra en la salida del municipio con rombo a Cadereyta Jiménez N.L. y el tercero se encuentra a la altura del puente de la Mosca casi llegando a Cadereyta Jiménez, N.L., así mismo y continuando con la entrevista refiere que solo a escuchando que \*\*\*\*\* en el municipio de Juárez N.L. son el "\*\*\*\*\*" el "\*\*\*\*\*" y el "\*\*\*\*\*". Además señala que su función consiste en recibir la información que le proporcionas las personas bajo su mando los cuales se les conoce como halcones, siendo esta información relativa al desplazamiento, movimientos, trayectoria y ubicaciones respecto de vehículos sospechosos, así como unidades oficiales, ya sean militares federales, estatales o de la ministerial, y que toda la información que recibe a su vez se la hace saber a el sujeto de apodo \*\*\*\*\*.

Así mismo al cuestionarle sobre la privación de la libertad de dos personas de sexo masculino las cuales circulaban a bordo de un vehiculo tipo PT CRUSIER la cual se dió en el mes de Diciembre del 2011 en el municipio de Juárez este comento que participo en dicho evento realizando labores de \*\*\*\*\* y siendo la punta dando seguridad por ordenes de una persona de sexo masculino apodado el "\*\*\*\*\*" mismo que traslado a las dos personas privadas de su libertad al corralón municipal desconociendo que hiciera este con la personas.

Se hace mención que el entrevistado tenía entre sus pertenencias un teléfono celular marca Samsung color negro y menciona que el número del teléfono es \*\*\*\*\*.

Así mismo se entrevisto al C. \*\*\*\*\*, Alias\*\*\*\*\*, 28 AÑOS, CASADO, Originario de \*\*\*\*\*, (Fecha Nac. \*\*\*\*\*, con domicilio Calle: \*\*\*\*\* quien venia sentado en el asiento del copiloto quien refiere que tiene 3 meses laborando para \*\*\*\*\*, realizando labores de \*\*\*\*\* y que su Jefe Inmediato es el \*\*\*\*\*, ya que este es el encargado de las Guardias y a quien le pasa toda la información, así mismo refiere que los días de Viernes y Sábado se va a trabajar de Taxi Pirata a la Sucursal de Soriana San Roque y que por medio del celular le reporta a el \*\*\*\*\* y que en el ocasiones le repara a el \*\*\*\*\* una Camioneta tipo Pic Up Chevrolet color Guinda y una camioneta tipo Caravan en color Blanca.

El cual portaba consigo un celular marca ZTE color negro y el cual es el número \*\*\*\*\*. en relación a su participación en otros hechos delictivos este menciona que sus labores se limitan a realizar labores de halconeo.

El tercer ocupante de la camioneta y quien iba en el asiento trasero es el C. \*\*\*\*\* alias el \*\*\*\*\* o el \*\*\*\*\* de 23 años, unión libre, originario de \*\*\*\*\* con fecha de nacimiento el día \*\*\*\*\*, con domicilio en la calle \*\*\*\*\*.

El cual refiere laborar para \*\*\*\*\* realizando las labores de \*\*\*\*\* recibiendo la cantidad de \$ 4,000 por quince refiriendo que tiene laborando para \*\*\*\*\* 1 año y 8 meses, mencionando que su punto es el denominado punto 6 el cual consta de la tienda Soriana San Roque hasta el negocio \*\*\*\*\* que se encuentra sobre la carretera libre a Reynosa, mencionando que dicha ruta la recorre a pie, \*\*\*\*\*, y que su Jefe Inmediato es \*\*\*\*\* al cual le reporta toda la información cada 15 o 20 minutos, al cual describe como un sujeto alto, cabello corto, tez morena, de complexión delgada y de 40 años aproximadamente el cual circula a bordo de una camioneta pick up Chevrolet cabina y media en color roja.

Así mismo entre sus pertenencias se encontró un celular marca LANIX con TV, en color negro con pila y con chip Telcel No. \*\*\*\*\* del cual desconoce el número teléfono ya que lo acababa de comprar. Y al cuestionarle su participación en algún otro hecho delictivo este menciona que su funciones se limitan a realizar labores de \*\*\*\*\*.

El cuarto ocupante de la Caravanas y quien iba en el asiento trasero es el C. \*\*\*\*\* alias el “\*\*\*\*\*” de 27 años, unión libre, originario de

\*\*\*\*\* , con fecha de nacimiento el día \*\*\*\*\* con domicilio en la calle \*\*\*\*\* .

El cual refiere que labora para \*\*\*\*\* realizando las labores \*\*\*\*\* desde hace aproximadamente 6 meses en el denominado punto 8, el cual es Soriana San Roque, su Jefe Inmediato es \*\*\*\*\* y que le pagan la cantidad de \$4,800.00 pesos, mencionando que desde dicho punto \*\*\*\*\* a su jefe inmediato \*\*\*\*\* , y que tiene un horario de 12 horas las cuales comprenden de 6:00 am. a 18:00 pm. Siendo relevado después por otras personas.

Así mismo entre sus pertenencias se encontró un teléfono celular marca LG en color negro con No. de chip Telcel \*\*\*\*\* y con numero telefónico \*\*\*\*\* , con una pila sin tapa. Y al ser cuestionado sobre su participación en otras actividades delictivas este menciona que solo labora como \*\*\*\*\* .

Se hace mención que el interior del vehiculo marca DODGE tipo CARAVAN con numero serie \*\*\*\*\* y con placas de circulación \*\*\*\*\* se encontró un Bat de Béisbol de madera en color café.

Así como también se hace de su conocimiento que los aparatos tanto celulares como de radio comunicación que portaban dichas personas fueron enviados al DEPARTAMENTO de DIRECCION DE ANALISIS E INFORMACION, los cuales se ponen a su disposición, así mismo se le informa que los vehículos marca chevrolet, tipo Aveo, en color negro con placas de circulación \*\*\*\*\* del estado de Nuevo León con número de serie \*\*\*\*\* y una Camioneta marca Chrysler tipo Caravan Blanca con placas de circulación \*\*\*\*\* del Estado de Nuevo León con número de serie \*\*\*\*\* , se encuentran en los patios de la Agencia Estatal de Investigaciones quedando desde éste momento a su disposición.

Además se pone a su disposición los siguientes objetos:

Un bat de béisbol de madera de 80 cm aproximadamente  
Una llave en color negro con la leyenda en color rojo JMA que pertenece al vehículo aveo.

Un llavero con 3 llaves una en color negro y dos en color plateado que pertenecen a la camioneta caravan blanca

Por último le informó que la detención de las personas que ahora se ponen a su disposición fue a las 16:00 horas del día 25 de Enero del presente año.

Investigación realizada por los agentes de nombre \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\*, y \*\*\*\*\* [...]” (sic)

b) Exámenes Médicos de la **Dirección de Criminalística y Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado** con folios 15477, 15478, 15482 y 15483 practicados, respectivamente, a los **Sres. \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\*, y \*\*\*\*\*** el 25-veinticinco de enero de 2012-dos mil doce.

c) Comparecencia del **Sr. \*\*\*\*\***, ante el **Agente del Ministerio Público Investigador número dos del Quinto Distrito Judicial en el Estado**, el 26-veintiséis de enero de 2012-dos mil doce, en la cual le notifican sus derechos y cargos y se da fe de que presentaba lesiones visibles.

d) Declaración informativa ministerial del **Sr. \*\*\*\*\*** ante el **Agente del Ministerio Público Investigador número dos del Quinto Distrito Judicial en el Estado** el 26-veintiséis de enero de 2012-dos mil doce.

e) Declaración preparatoria del **Sr. \*\*\*\*\*** desahogada ante el **Juez Penal y de Preparación Penal del Quinto Distrito Judicial del Estado**, dentro del expediente \*\*\*\*\*, el 28-veintiocho de enero de 2012-dos mil doce.

### III. SITUACIÓN JURÍDICA

1. La situación jurídica generada por la violación de derechos humanos y del contexto en el que los hechos se presentaron, y que es valorada en el cuerpo de esta resolución, de acuerdo a la versión del afectado, en esencia es la siguiente:

El **Sr. \*\*\*\*\*** refirió que a las 09:00 horas del 25-veinticinco de enero de 2012-dos mil doce, policías ministeriales lo detuvieron al estar en una tienda de abarrotes para llevarlo a la Agencia Estatal de Investigaciones, donde sufrió menoscabo en su integridad personal con el fin de que divulgara información sobre hechos punibles.

2. La **Comisión Estatal de Derechos Humanos**, con base en lo dispuesto por los **artículos 102 apartado “B” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 87 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 3 de la Ley que crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos y 13 de su Reglamento Interno**, tiene competencia en el Estado para conocer de quejas relacionadas con presuntas violaciones a los derechos humanos, cuando éstas fueren imputadas a autoridades o servidores públicos de carácter estatal, como lo es en el presente caso, **elementos de la Policía Ministerial de la Agencia Estatal de Investigaciones**.

#### IV. OBSERVACIONES

**Primera.** Del estudio y análisis pormenorizado de los hechos y evidencias que integra el expediente **CEDH/121/2012**, de conformidad con el **artículo 41 de la Ley que crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos**, al ser valorados en su conjunto, de acuerdo con los principios de la lógica y de la experiencia, se concluye que en la especie se acredita que los **elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones**, violaron los derechos a la **libertad y seguridad personales por detención arbitraria, integridad personal por tratos crueles e inhumanos y seguridad jurídica** del Sr. \*\*\*\*\*.

**Segunda.** La ley que rige el funcionamiento de este organismo señala que las pruebas obtenidas oficiosamente durante el procedimiento de investigación serán valoradas en su conjunto, de acuerdo con los principios de la lógica, la sana crítica y de la experiencia, a fin de que puedan producir convicción sobre los hechos denunciados o reclamados.<sup>1</sup>

La **Corte Interamericana de Derechos Humanos** ha establecido que en el estudio de violaciones a los derechos fundamentales, la valoración de las pruebas de los hechos es más flexible, pues basta que se realice de acuerdo con las reglas de la lógica y con base en la experiencia<sup>2</sup>. Esta comisión asume este criterio, por su naturaleza como institución estatal autónoma defensora de los derechos humanos y por la naturaleza expedita del procedimiento de investigación oficiosa que integra con motivo de las violaciones a los derechos fundamentales cometidas por los agentes del Estado, lo cual es acorde con los **Principios Relativos al Estatuto y Funcionamiento de las Instituciones Nacionales de Protección y Promoción de los Derechos Humanos o Principios de París**<sup>3</sup>, y por disposición expresa de la **Ley que crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos**.

---

<sup>1</sup> Artículo 41 de la Ley que crea la Comisión Estatal de derechos Humanos de Nuevo León

<sup>2</sup> Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Castillo Páez Vs. Perú. Sentencia. Noviembre 3 de 1997, párrafo 39.

*“39. La Corte reitera que los criterios de valoración de la prueba ante un tribunal de derechos humanos revisten características especiales, pues la determinación de la responsabilidad internacional de un Estado por violación de derechos de la persona humana, permite al Tribunal una mayor amplitud en la valoración de la prueba testimonial rendida ante él sobre los hechos pertinentes, de acuerdo con las reglas de la lógica y con base en la experiencia”.*

<sup>3</sup> Del 7-siete al 9-nueve de octubre de 1991, se celebró en París el primer taller internacional de las Naciones Unidas sobre las instituciones nacionales de derechos humanos. En el taller, las instituciones elaboraron y aprobaron normas mínimas internacionales para aumentar la eficacia de las instituciones nacionales de derechos humanos; los lineamientos aprobados son conocidos como los *Principios de París*. Estos principios fueron adoptados por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en 1992, mediante la Resolución 1992/54, y reafirmados al

En el caso concreto, el **Director de la Agencia Estatal de Investigaciones** fue requerido, a través de oficio dirigido al **Procurador General de Justicia del Estado de Nuevo León**, el 14-catorce de mayo de 2012-dos mil doce, para que rindiera informe documentado sobre los hechos contenidos en la queja de la víctima y lo específicamente solicitado por este organismo, otorgándosele, conforme al artículo 34 de la ley que rige a esta comisión, 15-quinze días naturales para cumplir con lo solicitado. A pesar de lo requerido, la autoridad nunca rindió informe ni contestación sobre los hechos notificados.

Lo anterior trae como consecuencia que **los hechos denunciados por la víctima se den por ciertos**, salvo prueba en contrario, de conformidad con el numeral **38 de la Ley que crea este organismo**. Dicho artículo dispone:

*“En el informe que rindan las autoridades o servidores públicos sobre los actos presuntamente violatorios de Derechos Humanos, deberán constar los antecedentes que obren en su poder, así como los razonamientos de las acciones, omisiones y resoluciones impugnadas por el quejoso o denunciante, a fin de que la Comisión se encuentre en aptitud de tomar las determinaciones que estime necesarias y congruentes.*

*“La falta de rendición del informe o de las documentación que lo apoye, así como el retraso injustificado en su presentación, además de la responsabilidad respectiva, tendrá el efecto de que se den por ciertos los hechos denunciados salvo prueba en contrario”*

El principio de presunción de veracidad del dicho de la probable víctima es uno de los presupuestos que rigen el procedimiento ante los organismos públicos autónomos defensores de los derechos humanos. Es por ello, que corresponde a la autoridad desvirtuar dicha presunción de veracidad con la presentación puntual de sus informes, acompañados de las constancias que acrediten objetivamente lo que expongan sobre la conducta que se les imputa como violatoria de los derechos humanos.

Por la razón anterior, el artículo 38 de la ley no sólo impone una sanción a la autoridad cuando no rinde su informe, lo presente de manera extemporánea o no acompañe las constancias que lo sustente, sino que,

---

siguiente año por la Asamblea General, mediante la Resolución 48/134. Los *Principios de París* se relacionan con el estatus y funcionamiento de las instituciones nacionales de derechos humanos (como las comisiones de derechos humanos y las defensorías del pueblo); entre otras cosas, las comisiones de derechos humanos deben ser capaces de supervisar cualquier situación de violación de los derechos humanos y son competentes para pronunciarse sobre las citadas violaciones mediante procedimiento expeditos cuasijurisdiccionales, cuando la ley así lo permite.

fundamentalmente, refleja la esencia garantista que el ombudsman como órgano de buena fe tiene frente a las presuntas víctimas, en el sentido de considerar que los agraviados dicen la verdad hasta que esté objetivamente acreditado lo contrario.

Esto no significa que los organismos públicos autónomos deban motivar sus recomendaciones únicamente en el dicho considerado cierto de la presunta víctima, pues como en todo procedimiento en el que se busque la verdad procesal, deberá haber un número razonable de confirmaciones sobre los hechos que son motivo de una queja. Sin embargo, en un contexto jurídico y procesal en el que el dicho de la presunta víctima se considere cierto con fundamento en el artículo 38 de la ley, el testimonio de la parte agraviada adquiere una importante relevancia para efectos del análisis del asunto, con base en la sana crítica, la lógica y la experiencia.

Asimismo, el artículo 38 de la ley, evidencia otro principio procesal ampliamente aplicado por los órganos y tribunales internacionales dedicados a la protección de los derechos fundamentales: la defensa de las autoridades acusadas de violar los derechos humanos, no puede estar basada en la imposibilidad de las presuntas víctimas de aportar pruebas que sustenten sus denuncias, cuando con motivo de los hechos, sean las propias autoridades las que tienen el control de los medios probatorios para aclarar lo expuesto por los agraviados. Así lo ha dicho la **Corte Interamericana de Derechos Humanos**:

*"59. [...]en ciertos casos el Estado es el que tiene el control de los medios para aclarar hechos ocurridos dentro de su territorio y por ello, su defensa no puede descansar sobre la imposibilidad del demandante de allegar pruebas que, en muchos casos, no pueden obtenerse sin la cooperación del Estado. [...]En tal sentido, [...] la negativa del Estado de remitir ciertos documentos no puede redundar en perjuicio de las víctimas, sino sólo en su propio perjuicio. [...]"<sup>4</sup>.*

Igualmente, este organismo público autónomo tampoco está obligado a requerir más de una vez a las autoridades para que rindan sus informes y exhiban sus constancias en tiempo o para que alguno de sus visitadores generales acudan a las oficinas de las autoridades para realizar la investigación respectiva, pues la reglas establecidas en los **artículos 72<sup>o5</sup> y 73<sup>o6</sup>**

---

<sup>4</sup> Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso González y otras ("Campo Algodonero") vs. México. Resolución de solicitud de ampliación de presuntas víctimas y negativa de remisión de prueba documental. Enero 19 de 2009, párrafo 59.

<sup>5</sup> Reglamento Interno de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, artículo 72°.

del **Reglamento Interno de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León**, no están dispuestas para el beneficio de las autoridades presuntamente responsables de violar los derechos humanos de los supuestos agraviados, otorgándoles varias oportunidades posteriores al primer requerimiento para que exhiban sus informes y las constancias respectivas, sino que dichas reglas existen para **facilitar la labor de investigación de este organismo, lo que fortalece su rol de garante de los derechos humanos de las presuntas víctimas.**

Por tanto, si este organismo público autónomo se allega de pruebas oficiosamente y de manera alternativa a las que las autoridades aportan con sus informes y con las constancias que acompañan, y por mayoría de razón cuando no aportan dichos documentos, puede motivar sus recomendaciones en dichos elementos de corroboración de los testimonios de las presuntas víctimas.

En términos del artículo 39<sup>7</sup> de la ley que rige a este organismo y del artículo 71<sup>6</sup> de su reglamento interno, la facultades de investigación de la Comisión

---

*"Artículo 72º.- Se podrá requerir hasta por dos ocasiones a la autoridad para que rinda el informe o envíe la documentación solicitada.*

*De no recibir respuesta, el Visitador General acudirá a la oficina de la autoridad para hacer la investigación respectiva, en los términos del artículo anterior.*

*Si del resultado de la investigación se acredita la violación a derechos humanos, la consecuencia será una Recomendación en la que se precise la falta de rendición del informe a cargo de la autoridad. En estos casos no habrá posibilidad de amigable composición. El envío de la Recomendación no impedirá que la Comisión pueda solicitar la aplicación de las responsabilidades administrativas correspondientes en contra del funcionario respectivo.*

*Si al concluir la investigación no se acredita la violación a derechos humanos, ser hará del conocimiento del quejoso, y, en su caso se orientará. En esta específica situación no habrá lugar a elaborar Acuerdo de No Responsabilidad a la autoridad."*

<sup>6</sup> Reglamento Interno de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, artículo 73º.

*"Artículo 73º.- Cuando una autoridad o servidor público sean omisos en dar respuesta a los requerimientos de la Comisión en más de dos ocasiones diferentes, lo Comisión recomendará al superior jerárquico del funcionario moroso que le imponga una amonestación pública con copia para su expediente."*

<sup>7</sup> Ley que crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos, artículo 39.

*"Artículo 39.- Cuando el asunto no se resuelva por vía conciliatoria, el correspondiente Visitador iniciará las investigaciones del caso, para cuya realización tendrá las siguientes facultades: I.- Pedir a las autoridades o servidores públicos a los que se imputen las violaciones de derechos humanos, la rendición de informes o documentación necesaria; II.- Solicitar de otras autoridades, servidores públicos o particulares todo género de documentos e informes; III.- Practicar las visitas e inspecciones que estime pertinentes por sí o por medio del personal técnico o profesional bajo su dirección; IV.- Citar a las personas que deban comparecer como peritos o testigos; o cualquier otra persona que pueda aportar información, sobre el asunto en trámite; V.- Efectuar todas las demás acciones que juzgue convenientes para el mejor conocimiento del asunto."*

Estatad de Derechos Humanos de Nuevo León son muy amplias; el legislador lo determinó así, puesto que la efectividad y eficacia de las investigaciones de este organismo no deben estar subordinadas a la voluntad de las autoridades presuntamente responsables de violar los derechos humanos. Este organismo autónomo siempre valorará de manera positiva el ánimo de colaboración de las autoridades investigadas, pero cuando éste no existe o es muy limitado, esta institución debe ser activa por mandato constitucional y legal.

Por otra parte, esta Comisión desea establecer que la materia de las resoluciones que emite en ejercicio de sus funciones, no involucra pronunciamiento alguno sobre la inocencia o responsabilidad penal de los afectados, sino al respeto a sus derechos humanos por parte de los agentes del Estado, que se contemplan en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en nuestro derecho interno.

**Tercera.** En este capítulo se acreditarán los hechos y, en su caso, se estudiará si aquellos por sí mismos constituyen violaciones a derechos humanos. Los hechos que se desprenden de la queja planteada son los relativos a los derechos a la libertad personal, a la integridad personal y a la propiedad privada.

El análisis se estructura según los derechos señalados, teniendo el cuerpo del escudriño el siguiente orden: primero se entrará, conforme a las reglas ya descritas, a la acreditación de los hechos. Se tomará en cuenta la parte general de la queja para tratar de englobarlas en una sinopsis, cuidando que lo que no pueda ser así se estudie y se referencie en esta misma parte; segundo, de haberse acreditado los hechos, se analizará las obligaciones de la autoridad conforme al marco normativo del derecho humano en que

---

<sup>8</sup> Reglamento Interno de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, artículo 71°.

*"Artículo 71°.- Durante la investigación de una queja, los Visitadores Generales, Adjuntos o cualquier funcionario que sea designado para el efecto, podrán presentarse a cualquier oficina administrativa o centro de reclusión para comprobar los datos que sean necesarios, hacer las entrevistas personales pertinentes, sea con autoridades o con testigos, o proceder el estudio de los expedientes o documentación necesarios. Las autoridades están obligadas a dar las facilidades que se requieran para el buen desempeño de las labores de investigación.*

*En caso de que la autoridad estime de carácter reservado la documentación solicitada, se estará a lo dispuesto por el Artículo 63 de la Ley. Independientemente de lo anterior, la falta de colaboración de las autoridades a las labores de los funcionarios de la Comisión podrá ser motivo de la presentación de una denuncia en su contra ante su superior jerárquico, además de la amonestación a que se refiere el último párrafo del Artículo 66 de nuestra ley.*

*Cuando a juicio del Presidente de la Comisión, el acto u omisión en que haya incurrido la autoridad responsable sea considerado como delito, según la Ley penal aplicable, se presentará la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público."*

incide lo acreditado; y tercero, se sopesará, conforme a lo acreditado y al estudio realizado de la obligación, si la autoridad incurrió en una violación a derechos humanos o no.

## 1. Libertad Personal

a) Hechos. Este organismo, a través del oficio 1934/2012 girado por el Juzgado Penal y de Preparación Penal del Quinto Distrito Judicial en el Estado de Nuevo León pudo allegarse del proceso penal \*\*\*\*\* que se le instruye al Sr. \*\*\*\*\*. En dicho proceso consta la averiguación previa y, por ende, la puesta a disposición. A partir de lo anterior, este organismo tiene como probado que, el 25-veinticinco de enero de 2012-dos mil doce, la policía ministerial se percató que por espacio de 40-cuarenta minutos estaban siendo seguidos por dos vehículos, por lo que les marcaron el alto y pudieron descubrir que los tripulantes estaban dando la ubicación de dónde se encontraban y que el vehículo en el que iba el Sr. \*\*\*\*\* tenía unas placas que no coincidían con la descripción del que conducía, por lo cual los agentes ministeriales llevaron a cabo su detención.

b) Marco normativo del derecho a la libertad y seguridad personales. Este derecho encuentra su sustento tanto en el ámbito local e internacional. En cuanto al derecho internacional, el Estado mexicano es parte del tratado internacional más importante en materia de derechos humanos en el continente americano<sup>9</sup>. Así la **Convención Americana** en su **artículo 7**<sup>10</sup> regula el derecho a la libertad y seguridad personales.

La prerrogativa exige, según la Corte, las siguientes obligaciones cuando se restrinja la libertad de una persona: que la detención sea lícita, que se le

---

<sup>9</sup> El derecho a la libertad personal también está regulado en el: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 9; Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 3; Convención Internacional para la Protección de todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas; y Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

<sup>10</sup>Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 7:

*“Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. 4. Toda persona detenida o retenida **debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella.** 5. Toda persona detenida o retenida **debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales** y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio [...]”.*

digán de las razones y motivos y cargos de su detención y que sea remitido sin demora ante funcionario jurisdiccional que pueda realizar un control judicial de su detención<sup>11</sup>; obligaciones que se analizarán a continuación.

**i) En cuanto a la información de las razones de la detención y de la notificación de los cargos**, los instrumentos internacionales<sup>12</sup> señalan que los motivos del arresto deberán ser informados de manera sencilla, pudiendo ser de forma oral<sup>13</sup> y al momento de la detención<sup>14</sup> y que la notificación del

---

<sup>11</sup> Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez. Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Noviembre 21 de 2007, párrafo 51.

"51. El artículo 7 de la Convención **tiene dos tipos de regulaciones** bien diferenciadas entre sí: una **general** y otra **específica** [...] la específica **está compuesta por una serie de garantías que protegen el derecho a no ser privado de la libertad ilegalmente** (art. 7.2) o **arbitrariamente** (art. 7.3), **a conocer las razones de la detención** y los cargos formulados en contra del detenido (art. 7.4), **al control judicial** de la privación de la libertad y la razonabilidad del plazo de la prisión preventiva (art. 7.5) [...]"

<sup>12</sup> Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión de Naciones Unidas, principio 10.

"Principio 10

Toda persona arrestada será informada en el momento de su arresto de la razón por la que se procede a él y notificada sin demora de la acusación formulada contra ella."

<sup>13</sup> Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez. Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Noviembre 21 de 2007, párrafo 71 y 76.

"71. La información sobre los motivos y razones de la detención **necesariamente supone informar, en primer lugar, de la detención misma. La persona detenida debe tener claro que está siendo detenida. En segundo lugar, el agente que lleva a cabo la detención debe informar en un lenguaje simple, libre de tecnicismos, los hechos y bases jurídicas esenciales en los que se basa la detención. No se satisface el artículo 7.4 de la Convención si sólo se menciona la base legal.**"

"76. En segundo lugar, la primera obligación del artículo 7.4 de la Convención **no especifica que la información que el detenido debe recibir tenga que ser escrita. Para esta Corte, puede satisfacerse dicha obligación de manera oral, no así la segunda obligación del artículo 7.4 de la Convención, referente a la notificación, sin demora, del cargo o cargos formulados contra el detenido, la cual debe darse por escrito [...]**"

<sup>14</sup> Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Noviembre 26 de 2010, párrafo 105.

"105. Esta Corte ha establecido que, a la luz del artículo 7.4 de la Convención Americana, **la información de los 'motivos y razones' de la detención debe darse 'cuando ésta se produce'**, lo cual constituye un mecanismo para evitar detenciones ilegales o arbitrarias desde el momento mismo de la privación de libertad y, a su vez, garantiza el derecho de defensa del individuo. Asimismo, esta Corte ha señalado que el agente que lleva a cabo la detención **debe informar en un lenguaje simple, libre de tecnicismos, los hechos y bases jurídicas esenciales en los que se basa la detención. No se satisface el artículo 7.4 de la Convención si sólo se menciona la base legal.**"

cargo y acusación deberá ser sin demora y por escrito. Asimismo señala que este derecho presupone la información de la detención misma, es decir que la persona tenga claro que está siendo detenida.

**ii) En cuanto al control judicial**, además de que es necesario para evitar la arbitrariedad o ilegalidad<sup>15</sup> de las detenciones, éste es un mecanismo o garantía que tiene el detenido para que se califique la detención y, en su caso, se le restituya su libertad ambulatoria.

La **Constitución Mexicana** en su **artículo 21** le deja al Ministerio Público el monopolio de la investigación y del ejercicio de la acción penal<sup>16</sup>. Por tal motivo, es necesario distinguir que el funcionario autorizado por ley para garantizar el debido proceso legal durante la etapa de investigación penal es el Ministerio Público<sup>17</sup>, toda vez que, según el **artículo 133**<sup>18</sup> del **Código de**

---

<sup>15</sup> Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez. Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Noviembre 21 de 2007, párrafo 81.

*“81. La parte inicial del artículo 7.5 de la Convención dispone que la detención de una persona **debe ser sometida sin demora a revisión judicial**. El control judicial inmediato es una **medida tendiente a evitar la arbitrariedad o ilegalidad de las detenciones** [...]”.*

<sup>16</sup> Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 21.

*“Artículo 21.*

***La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público** y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.*

***El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público.** La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial.*

*[...]*

*El Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal, en los supuestos y condiciones que fije la ley.*

*[...]”.*

<sup>17</sup> Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Noviembre 26 de 2010, párrafo 96.

*“96. Al margen de si en el presente caso existió o no flagrancia, en dicho supuesto, cuando la detención ocurre por parte de una autoridad, **el derecho mexicano distingue entre dos momentos para valorar el alcance del control sobre la detención**. El **primer momento** se relaciona con la **remisión inmediata ante autoridad competente** por parte de la autoridad que detiene. El **segundo momento** corresponde a la **remisión que debe efectuar el Ministerio Público a un juez en el plazo de 48 horas**.”.*

<sup>18</sup> Código de Procedimientos Penales del Estado de Nuevo León, artículo 133.

*“Artículo 133[...] El Ministerio Público, **si recibe diligencias de Policía Ministerial con detenidos, y la detención fuera injustificada, ordenará que queden en libertad con las reservas de Ley**. [...]”.*

**Procedimientos Penales del Estado de Nuevo León**, el Representante Social puede dejar en libertad al detenido cuando su detención fuera injustificada.

Asimismo, es importante hacer hincapié en que la Corte ha señalado que el término "sin demora" debe analizarse según el contexto y las circunstancias de cada caso en particular. Lo anterior se robustece con la siguiente transcripción:

*"101. Consecuentemente, la Corte constata que desde el momento de la detención de las presuntas víctimas los agentes del Ejército contaron con más de un medio para transportarlas y llevarlas sin demora, primero ante el Ministerio Público y, posteriormente, ante la autoridad judicial, por lo menos el día 3 de mayo de 1999. Además, cabe reiterar que la autoridad del Ministerio Público de Arcelia se presentó al lugar de los hechos a las 08:00 horas del 4 de mayo de 1999 y, no obstante ello, no asumió la custodia de las presuntas víctimas (supra párr. 97).*

*102. Siguiendo la jurisprudencia del Tribunal (supra párr. 93) en lo que concierne a la autoridad competente para la remisión sin demora, este Tribunal reitera que los señores Cabrera y Montiel debieron ser llevados ante el juez lo más pronto posible y, en este caso, ello no ocurrió sino hasta casi 5 días después de su detención. En ese sentido, el Tribunal observa que los señores Cabrera y Montiel fueron puestos a disposición de la autoridad competente excediendo el término establecido en la Convención Americana, que claramente exige la remisión "sin demora" ante el juez o funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales sobre control de la libertad. Al respecto, la Corte reitera que en zonas de alta presencia militar, donde los miembros de la institución militar asumen control de la seguridad interna, la remisión sin demora ante las autoridades judiciales cobra mayor importancia con el fin de minimizar cualquier tipo de riesgo de violación a los derechos de la persona (supra párr. 89). En consecuencia, la Corte considera que se vulneró el artículo 7.5 de la Convención Americana en perjuicio de los señores Cabrera y Montiel. Además, dada la falta de remisión sin demora ante la autoridad competente, el Tribunal considera que esta irregularidad en el control de la detención la transformó en arbitraria y no estima pertinente hacer ningún tipo de pronunciamiento sobre la causa que originó la misma. Por tanto, la Corte declara la violación del artículo 7.3, en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana."*<sup>19</sup>

En la jurisprudencia citada, la Corte tomó en cuenta, además de lo transcrito, que la autoridad contaba con helicópteros para poder transportar al

---

<sup>19</sup> Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Noviembre 26 de 2010, párrafos 101 y 102.

detenido y la ubicación geográfica de la zona. Por tal motivo el término sin demora debe entenderse como lo más pronto posible que la autoridad, ateniendo las circunstancias y contexto de los hechos, pudo haber puesto al detenido a disposición del funcionario que ejerce el control de la detención. Siendo evidente entonces, que dicho término debe ser justificado por la autoridad por ser esta una obligación estatal.

**c) Conclusiones.** A continuación, con base en los hechos acreditados y el marco normativo referido, se determinará si los hechos narrados en la queja son constitutivos de violaciones a derechos humanos.

**i) Motivos y razones de la detención.** En el inciso de la acreditación de hechos se concluyó como cierta la detención del Sr. \*\*\*\*\*.

Como la exposición de las razones y motivos de la detención, así como su control, son obligaciones positivas del Estado<sup>20</sup>, le corresponde a este último demostrar el cumplimiento de aquéllas. Por eso, este organismo considera necesario siempre analizarlas.

El parte informativo, documento idóneo para que la autoridad acredite la obligación en comento, hace inevitable señalar que se actualiza la violación. Este organismo considera que desde que no se le dijo ni siquiera que estaba detenido se presentó la violación. No basta con informar los motivos y razones de la detención, sino que estos deben estar ajustados a la verdad<sup>21</sup>.

Además, no hay prueba que acredite el efectivo cumplimiento de esta obligación positiva. En la puesta a disposición no consta que a la víctima se le haya informado, al momento de haber sido abordado por los agentes

---

<sup>20</sup> Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Tibi Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Septiembre 7 de 2004, párrafo 108.

*"108. Los incisos 4, 5 y 6 del artículo 7 de la Convención Americana establecen obligaciones de carácter positivo que imponen exigencias específicas tanto a los agentes del Estado como a terceros que actúen con la tolerancia o anuencia de éste y sean responsables de la detención."*

<sup>21</sup> Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Tibi Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Septiembre 7 de 2004, párrafos 111 y 113.

*"111. En el caso sub judice se ha demostrado que el señor Tibi, al momento de su detención, efectuada el 27 de septiembre de 1995, no fue informado de las verdaderas razones de aquélla, ni notificado de los cargos que se le imputaban y los derechos con que contaba, y tampoco se le mostró la orden de detención, que el Juez Primero de lo Penal del Guayas dictó un día después, 28 de septiembre de 1995. La razón que se le dio fue que se trataba de un control migratorio (supra párr. 90.11)."*

*"113. Con base en lo anteriormente expuesto, esta Corte considera que el Estado violó el artículo 7.4 de la Convención, en perjuicio del señor Daniel Tibi."*

ministeriales, que a partir de ese momento estaba siendo objeto de una detención con motivo de hechos que lo involucraban con los delitos Cometidos Contra Instituciones Oficiales y Servidores Públicos y Falsificación de Documentos. Del reporte ministerial, no se advierte que los elementos captadores le refirieron a la víctima que existía un motivo para la detención, pues sólo se asentó: “[...] por lo que procedieron a detener a las cuatro personas [...]”.

Por todo lo anterior, este organismo considera que la detención del Sr. \*\*\*\*\* fue arbitraria; contraviniendo los artículos 7.1, 7.3 y 7.5 de la **Convención Americana sobre Derechos Humanos** y 9.1 y 9.2 del **Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos**, en relación con los **artículos 1 y 133** de la **Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**.

ii) Control de la detención. El parte informativo asentó que se logró la detención de la víctima a las 14:35 horas del 25-veinticinco de enero de 2012-dos mil doce, sin embargo, el sello de recepción del parte asienta que el Representante Social recibió el reporte y, por ende a la víctima, hasta las 02:30 horas del 26-veintiséis de enero de 2012-dos mil doce; es decir, mediaron entre la detención y la puesta a disposición más de 11-once horas.

Como se advirtió en el apartado del marco normativo, el término sin demora se debe estudiar no en términos aritméticos *per se* sino bajo el contexto en que la puesta a disposición se llevó a cabo. Por eso, es necesario que la autoridad explique del porqué la puesta a disposición se realizó con demora.

En el presente caso, esta comisión considera injustificado que la autoridad se haya tardado más de once horas para poner al detenido a disposición del Representante Social; ni cuestiones de distancia o logística podrían justificar la detención del agraviado si se toma en cuenta que fue puesto a disposición en el mismo distrito judicial en el que fue detenido.

Por tal situación, esta comisión determina que el Sr. \*\*\*\*\* sufrió una detención arbitraria al no haber sido puesto a disposición inmediatamente de autoridad competente para que controlara su detención, incurriendo así en violaciones a los artículos 7.1, 7.3 y 7.5 de la **Convención Americana sobre Derechos Humanos** y 9.1 y 9.3 del **Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos**, en relación con los **artículos 1 y 133** de la **Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**.

## 2. Integridad Personal

a) Hechos. En términos generales, el Sr. \*\*\*\*\* refirió que sufrió menoscabo en su integridad personal al ser golpeado con un objeto duro en cabeza,

espalda y genitales. Asimismo, refirió que fue víctima del método de la bolsa y del agua con fines de asfixia.

La dinámica de hechos coincide con las lesiones que la **Dirección de Criminalística y Servicios Periciales** certificó a las 17:00 horas del 25-veinticinco de enero de 2012-dos mil doce; es decir, dos horas y media después de que se materializó la detención de la víctima.

<p>Hechos de queja planteados por el Sr. *****.</p>	<p>Certificación médica de la <b>Dirección de Criminalística y Servicios Periciales</b> de fecha 25 de enero de 2012, con número de folio 15477, al Sr. *****.</p>
<p><i>Después le vendaron también los brazos, entrelazándoselos por la espalda [...] Acto seguido comenzaron a agredirlo con un objeto duro que cree era una tabla o un bat, propinándole aproximadamente 10-diez <b>golpes en la cabeza</b>; intentó levantarse del suelo, pero le propinaron un golpe <b>en la espalda</b> con el objeto duro[...] Posteriormente sintió que se subieron en su pecho, ya que sentía como si fueran las rodillas de una persona, y le abrieron las piernas; acto seguido le propinaron 4-cuatro golpes en sus genitales, con el objeto duro[...]”.</i></p>	<p><b>Equimosis y hematomas en región interescapular</b>, región malar izquierda y fosa y flanco izquierdos, así como en <b>región médica esternal</b>.</p>

El dictamen médico de la **Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León** constata que el día en que se detuvo al agraviado presentaba lesiones en su pecho y espalda. Asimismo, en la queja se certificó que la víctima presentaba equimosis en costado izquierdo parte baja.

Además, en las comparecencias ministeriales del 26-veintiséis de enero de 2012-dos mil doce, el Representante Social certificó que la víctima presentaba dificultad para abrir la mano izquierda y que tenía hematomas en el rostro.

También destaca que de las siete personas detenidas, además de la víctima, los **Sres. \*\*\*\*\***, **\*\*\*\*\*** y **\*\*\*\*\*** presentaban lesiones similares a la víctima como son: equimosis y excoriaciones en región esternal, subescapular e interescapular y malar izquierda. Lo anterior cobra relevancia, porque la dinámica de hechos narrada por la autoridad no vislumbra la posibilidad de que esas lesiones hayan sido conferidas antes de su detención, toda vez que el parte informativo no señala resistencia ni intento de sustracción de la justicia, concluyéndose entonces que esas lesiones fueron inferidas por la autoridad después de la detención.

Por todo lo anterior, aunado a la presunción de veracidad desprendida de la falta de rendición del informe documentado, y teniendo en cuenta que la víctima estuvo más de once horas incomunicada coactivamente por parte de los agentes aprehensores, esta comisión considera que se acredita el menoscabo sólo en cuanto a la dinámica de golpes narrada por la víctima en su queja, toda vez que existe un dictamen de la Procuraduría que certifica lesiones que coinciden con la agresión que relató el agraviado.

**b) Marco normativo del derecho a la Integridad.** Los derechos humanos encuentran su justificación en que son una forma de limitar el poder gobernador del Estado<sup>22</sup>. El reconocimiento de estos derechos implican que el último garantice (obligaciones positivas o de hacer) y respete (obligaciones negativas o de no hacer) los mismos. Por eso, sobre cada derecho siempre habrá acciones y omisiones que se deban observar en las actuaciones de la autoridad<sup>23</sup>.

---

22 Esta aseveración se respalda en la obra de Jorge Carpizo titulada *Derechos Humanos y Ombudsman*, de la editorial Porrúa y de la Universidad Nacional Autónoma de México; toda vez que en la página 46 señala "Aquí es donde aparece la figura del Ombudsman como un instrumento más, pero importante, en el complejo mecanismo que tiende a controlar el poder en beneficio de la libertad, la igualdad y la seguridad jurídica de personas".

Con todo lo anterior, entonces, se puede concluir que, en vista que la Comisión Nacional y esta comisión, comparando su marco normativo, tienen naturaleza jurídica similar, misma que se asemeja a la de un *Ombudsman*, las Comisiones de esta naturaleza deben permanentemente ir construyendo acciones para ganarse o mantener la confianza de la sociedad.

<sup>23</sup> Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso González y otras ("Campo Algodonero") Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Noviembre 16 de 2009, párrafo

"234. El Tribunal ha establecido que, de acuerdo con el artículo 1.1 de la Convención, los **Estados** están **obligados a respetar y garantizar** los derechos humanos reconocidos en ella. La responsabilidad internacional del Estado se **funda** en **actos u omisiones** de cualquier poder u órgano de éste, independientemente de su jerarquía, que violen la Convención Americana.

235. En cuanto al **deber de respeto** [...] es la de 'respetar los derechos y libertades' reconocidos en la Convención. Así, en la protección de los derechos humanos, está **necesariamente comprendida** la noción de la **restricción al ejercicio del poder estatal**.

236. Sobre la **obligación de garantía** la Corte ha establecido que puede ser **cumplida** de **diferentes maneras**, en función del derecho específico que el Estado deba **garantizar** y de las particulares **necesidades** de protección. Esta obligación implica el deber de los Estados de **organizar** todo el **aparato gubernamental** y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de **asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos**. Como parte de dicha obligación, el Estado está en el deber jurídico de **prevenir, razonablemente, las violaciones** de los derechos humanos [...] Lo decisivo es dilucidar 'si una determinada violación [...] ha tenido lugar con el apoyo o la tolerancia del poder

Sus características son las de universalidad, inalienabilidad, indivisibilidad, interdependencia, entre otras. En cuanto a las últimas dos, éstas hacen a los derechos humanos estar relacionados entre sí, por tal motivo en el goce de un derecho puede estar involucrada otra prerrogativa y la misma situación puede ocurrir en caso de que se viole alguno de ellos.

Tal situación se puede observar cuando una persona es privada de la libertad. La **Convención Americana** en el artículo **5.2** contempla que “*toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano*”, reflejándose así la interdependencia que existe entre los derechos a la libertad personal y a la integridad personal.

De igual forma los órganos interamericanos de derechos humanos han establecido que el Estado (autoridad) se convierte en garante de los demás derechos humanos no restringidos a un detenido, ya que la persona al ser privada de la libertad pierde arbitrio en sus decisiones y el goce de sus derechos se ve supeditado a la voluntad del garante<sup>24</sup>.

Señalado lo anterior, es necesario examinar el derecho a la integridad personal. Este derecho encuentra su marco normativo en distintos instrumentos del derecho interno e internacional. En nuestro derecho interno se encontraba regulado, al momento de los hechos, en **la fracción II, del apartado A, del artículo 20** de la **Constitución** al señalar en relación con una persona imputada de un delito:

---

*público o si éste ha actuado de manera que la trasgresión se haya cumplido en defecto de toda prevención o impunemente’.*”.

<sup>24</sup> Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe sobre los Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad en las Américas. Diciembre 31 de 2011, párrafo 49.

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Bulacio Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Septiembre 18 de 2003, párrafo 126.

*“49. En efecto, el principal elemento que define la privación de libertad es la dependencia del sujeto a las decisiones que adopte el personal del establecimiento donde éste se encuentra recluso. Es decir, las autoridades estatales ejercen un control total sobre la persona que se encuentra sujeta a su custodia. Este particular contexto de subordinación del recluso frente al Estado –que constituye una relación jurídica de derecho público– se encuadra dentro de la categoría ius administrativista conocida como **relación de sujeción especial**, en virtud de la cual el Estado, al privar de libertad a una persona, se constituye en garante de todos aquellos derechos que no quedan restringidos por el acto mismo de la privación de libertad [...]”.*

*“126. Quien sea detenido ‘tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal’. La Corte ha establecido que el Estado, como responsable de los establecimientos de detención, es el garante de estos derechos de los detenidos [...] La forma en que se trata a un detenido debe estar sujeta al escrutinio más estricto, tomando en cuenta la especial vulnerabilidad de aquél [...]”.*

*“No podrá ser obligado a declarar. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida ante cualquier autoridad distinta del Ministerio Público o del juez, o ante éstos sin la asistencia de su defensor carecerá de todo valor probatorio.”.*

Más puntual encuentra esta Comisión lo que establece el **artículo 5** de la **Convención**<sup>25</sup> al asentar que la integridad personal<sup>26</sup> no sólo se refiere al físico, sino también a la psique y a la moral. Así, podemos aseverar que no es necesario que haya vejámenes para poder determinar una violación al derecho a la integridad personal, pues este es un derecho complejo y que exige una regulación estricta al grado que no es posible su suspensión bajo ningún motivo, ni inclusive en las situaciones más adversas y extremas<sup>27</sup>.

Retomando las obligaciones positivas y negativas que señala el **artículo 1.1** de la **Convención Americana**, en el caso del derecho a la integridad, como en todos los derechos, se pueden observar que la autoridad debe cumplir con ciertos actos, para garantizar y prevenir, y omisiones, para no incurrir en responsabilidades. La **obligación negativa** implica que la autoridad no debe incurrir en actos que atenten la integridad física, psíquica y moral, aunque, hay que señalar, la Corte ha determinado que por omisiones (violación a las

---

<sup>25</sup> Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 5.

*“Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal. 1. Toda persona **tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.** 2. **Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.** Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano [...]”.*

<sup>26</sup> También se encuentra regulada en: Declaración Universal de Derechos Humanos, Art. 3 y 5; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Art. 7 y 10; Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, Art. 1; Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, Art. 2 y 3.

<sup>27</sup> Dicha afirmación se funda, entre otros, en el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 27.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Familia Barrios VS. Venezuela. Fondo Reparaciones y Costas. Noviembre 24 de 2011, párrafo 50.

*“50. Por otra parte, la Convención Americana reconoce expresamente el derecho a la integridad personal, bien jurídico cuya protección encierra la finalidad principal de **la prohibición imperativa de la tortura y penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.** Este Tribunal ha considerado de forma constante en su jurisprudencia que dicha prohibición **pertenece hoy día al dominio del ius cogens. El derecho a la integridad personal no puede ser suspendido bajo circunstancia alguna.**”.*

obligaciones positivas) se puede llegar a atacar contra la integridad<sup>28</sup>, siendo entonces la afectación o sufrimiento la que determinará si se actualiza lo establecido en el **artículo 5.2 convencional**.

Esta violación abarca desde penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes hasta tortura. La diferencia entre una y otra radica, según lo ha dicho la Corte, en la intencionalidad, severidad del sufrimiento y finalidad del acto<sup>29</sup>. Lo que determinará una u otra será la severidad o gravedad del sufrimiento. Para tal circunstancia, la Corte ha señalado que se deben estudiar los factores endógenos y exógenos<sup>30</sup> de las circunstancias para, después de administrarlo con otras evidencias, concluir si los hechos constituyen tortura o no.

---

<sup>28</sup> Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Febrero 24 de 2011, párrafo 77.

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Radilla Pacheco Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Noviembre 23 de 2009, párrafo 143.

*"94. Por otro lado, la desaparición forzada de María Claudia García es violatoria del derecho a la integridad personal porque el solo hecho del aislamiento prolongado y de la incomunicación coactiva, representa un tratamiento cruel e inhumano en contradicción con los párrafos 1 y 2 del artículo 5 de la Convención."*

*"161. La Corte ha considerado en numerosos casos que los familiares de las víctimas de violaciones de los derechos humanos pueden ser, a su vez, víctimas. En particular, en casos que involucran la desaparición forzada de personas, es posible entender que la violación del derecho a la integridad psíquica y moral de los familiares de la víctima es una consecuencia directa, precisamente, de ese fenómeno, que les causa un severo sufrimiento por el hecho mismo, que se acrecienta, entre otros factores, por la constante negativa de las autoridades estatales de proporcionar información acerca del paradero de la víctima o de iniciar una investigación eficaz para lograr el esclarecimiento de lo sucedido."*

<sup>29</sup> Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Agosto 31 de 2010, párrafo 118.

*"118. [...] **Esto es así ya que los elementos objetivos y subjetivos que califican un hecho como tortura no se refieren ni a la acumulación de hechos ni al lugar donde el acto se realiza, sino a la intencionalidad, a la severidad del sufrimiento y a la finalidad del acto [...]**"*

<sup>30</sup> Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Familia Barrios VS. Venezuela. Fondo Reparaciones y Costas. Noviembre 24 de 2011, párrafo 52.

*"52. [...] **'[I]a infracción del derecho a la integridad física y psíquica de las personas es una clase de violación que tiene diversas connotaciones de grado y que abarca desde la tortura hasta otro tipo de vejámenes o tratos crueles, inhumanos o degradantes, cuyas secuelas físicas y psíquicas varían de intensidad según los factores endógenos y exógenos que deberán ser demostrados en cada situación concreta'. [...]** Asimismo, el Tribunal ha indicado que **todo uso de la fuerza que no sea estrictamente necesario por el propio comportamiento de la persona detenida constituye un atentado a la dignidad humana en violación del artículo 5 de la Convención Americana.**"*

Ahora bien, si bien es cierto que el apartado 1 del mencionado artículo 5 establece que toda persona tiene derecho a que se le respete su integridad personal, también lo es que dicha disposición no es absoluta, pues los instrumentos internacionales<sup>31</sup> establecen el uso de la fuerza legal para menoscabar la integridad y, en su caso, e inclusive, la vida.

La Corte Interamericana ha establecido que, con relación al uso de la fuerza:

*"49. [...] los Estados deben vigilar que sus **cuerpos de seguridad, a quienes les está atribuido el uso legítimo de la fuerza, respeten el derecho a la vida** de quienes se encuentren bajo su jurisdicción. La Corte ha tenido oportunidad de pronunciarse en otros casos acerca de los criterios que determinan el uso legítimo de la fuerza por parte de miembros de cuerpos de seguridad del Estado. A la luz de esos criterios son analizados los hechos de este caso. Al respecto, el uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad estatales: **a) debe estar definido por la excepcionalidad**, y debe ser planeado y limitado proporcionalmente por las autoridades. En este **sentido, sólo podrá hacerse uso de la fuerza o de instrumentos de coerción cuando se hayan agotado y hayan fracasado todos los demás medios de control**; b) el uso de la fuerza letal y las armas de fuego contra las personas debe estar prohibido como regla general, y su uso excepcional deberá estar formulado por ley y ser interpretado restrictivamente, no siendo más que el "absolutamente necesario" en relación con la fuerza o amenaza que se pretende repeler; c) debe estar limitado por los principios de proporcionalidad, necesidad y humanidad. **La fuerza excesiva o desproporcionada por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que da lugar a la pérdida de la vida puede por tanto equivaler a la privación arbitraria de la vida [...]**".<sup>32</sup>*

Con la anterior transcripción, esta comisión tiene claro que el derecho a la vida no está protegido de forma ilimitada, pues la misma Corte Interamericana contempla que la fuerza excesiva o desproporcionada puede dar lugar a una privación arbitraria de la vida, entendiéndose entonces que puede haber una privación lícita o no arbitraria de la vida.

Lo anterior es relevante porque bajo el principio general de derecho *cui licet, quod est plus, licet utique, quod est minus*<sup>33</sup> el derecho de la integridad tampoco tiene una protección ilimitada y se debe entender que el uso de la

---

<sup>31</sup> Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por parte de Oficiales Encargados de Hacer Cumplir la Ley; Código de Conducta Para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.

<sup>32</sup> Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Familia Barrios VS. Venezuela. Fondo Reparaciones y Costas. Noviembre 24 de 2011, párrafo 49

<sup>33</sup> A quien es lícito lo que es más, ciertamente le es lícito lo que es menos.

fuerza<sup>34</sup> legal es un reflejo de aquello. Lo anterior se afirma pues si la vida, principio que ha dicho la Corte es fundamental y prerequisite para el disfrute de los demás derechos<sup>35</sup>, puede ser limitada, la integridad, al depender de ésta, y tener una línea muy delgada entre ella y aquélla, pues una misma acción pudiera repercutir en una u otra, también puede ser restringida.

Entonces para determinar si el menoscabo de la integridad personal es una violación a derechos humanos o no, es necesario hacer un análisis puntual del uso de la fuerza. La Corte ha determinado que el uso de la fuerza debe observar los siguientes principios: excepcionalidad, proporcionalidad, necesidad y humanidad<sup>36</sup>. Resulta evidente que el principio de excepcionalidad condiciona el análisis de los otros tres principios, pues el uso de la fuerza que no sea excepcional no podrá ser proporcional, necesario ni bajo la observancia de la humanidad.

---

<sup>34</sup> Cabe señalar que éste también está regulado en el sistema legal mexicano, toda vez que en la fracción I del artículo 40 y en el artículo 41 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública se establece que:

*“Artículo 40. Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública se sujetarán a las siguientes obligaciones: I. Conducirse siempre con dedicación y disciplina, así como con apego al orden jurídico y respeto a las garantías individuales y derechos humanos reconocidos en la Constitución [...]”.*

*“Artículo 41. [...] Siempre que se use la fuerza pública se hará de manera racional, congruente, oportuna y con respeto a los derechos humanos. Para tal efecto, deberá apegarse a las disposiciones normativas y administrativas aplicables, realizándolas conforme a derecho.”.*

<sup>35</sup> Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Zambrano Vélez y otros VS. Ecuador. Fondo Reparaciones y Costas. Julio 4 de 2007, párrafo 49.

*“78. La Corte ha considerado reiteradamente que el **derecho a la vida es un derecho humano fundamental**, cuyo **goce pleno es un prerequisite para el disfrute de todos los demás derechos humanos** [...]”.*

<sup>36</sup> Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Zambrano Vélez y otros VS. Ecuador. Fondo Reparaciones y Costas. Julio 4 de 2007, párrafos 83 y 85.

*“83. El **uso de la fuerza** por parte de los cuerpos de seguridad estatales debe estar **definido por la excepcionalidad** [...] **sólo podrá hacerse uso de la fuerza** o de instrumentos de coerción **cuando se hayan agotado y hayan fracasado todos los demás medios de control**.”.*

*“85. El **uso de la fuerza debe estar limitado por los principios de proporcionalidad, necesidad y humanidad**. La fuerza excesiva o **desproporcionada** por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que **da lugar a la pérdida de la vida** puede por tanto equivaler a la privación arbitraria de la vida. El principio de **necesidad** justifica sólo las medidas de violencia militar no prohibidas por el derecho internacional, **que son relevantes y proporcionadas para garantizar el pronto sometimiento del enemigo con el menor gasto posible de recursos humanos y económicos**. El principio de **humanidad** complementa y limita intrínsecamente el principio de necesidad, **al prohibir las medidas de violencia que no son necesarias** (es decir, relevantes y proporcionadas) para el logro de una ventaja militar definitiva [...]”.*

En otro orden de ideas, la Corte ha señalado, en relación con una persona que, estando bajo la custodia del Estado, presenta lesiones, lo siguiente:

*"134. [...] La jurisprudencia de este Tribunal también ha señalado que siempre que una persona es detenida en un estado de salud normal y posteriormente aparece con afectaciones a su salud, corresponde al Estado proveer una explicación creíble de esa situación. **En consecuencia, existe la presunción de considerar responsable al Estado por las lesiones que exhibe una persona que ha estado bajo la custodia de agentes estatales.** En dicho supuesto, recae en el Estado la obligación de proveer una explicación satisfactoria y convincente de lo sucedido y desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad, mediante elementos probatorios adecuados [...]"*.<sup>37</sup>

De la anterior transcripción se puede concluir que si un detenido presenta lesiones existe la presunción *juris tantum* de que fue la autoridad quien las produjo, por tal motivo es necesario que la autoridad explique y anexe documentación que desvirtúe tal prueba.

Por otro lado, y entrando a lo que se refiere a las **obligaciones positivas** respecto a la integridad personal, la **Corte Interamericana** ha señalado que los detenidos deben de recibir atención y revisión médica, pues su omisión o un servicio deficiente es violatorio del derecho a la integridad personal<sup>38</sup>. En el derecho interno mexicano, el Ministerio Público tiene la obligación de ordenar la realización del dictamen<sup>39</sup>, por tal motivo la puesta a disposición sin demora influye en la elaboración del dictamen y, consecuentemente, en la integridad. De hecho, los **Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas** en el apartado 3 del

---

<sup>37</sup> Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Noviembre 26 de 2010, párrafo 134.

<sup>38</sup> Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Bulacio Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Septiembre 18 de 2003, párrafo 131.

*"131. Los **detenidos deben contar con revisión y atención médica** preferentemente a cargo de un facultativo elegido por ellos mismos o por quienes ejercen su representación o custodia legal. [...] **La Corte ha señalado que la atención médica deficiente de un detenido es violatoria del artículo 5 de la Convención Americana.**"*

<sup>39</sup> Código de Procedimientos Penales del Estado de Nuevo León, fracción V del artículo 3.

*"Artículo 3º- El Ministerio Público del Estado, en el ejercicio de sus actividades de investigación y persecución de los delitos y las de preparación para el ejercicio de la acción penal, deberá [...] V.- Hacer que tanto el ofendido como el probable responsable, en su caso, sean examinados inmediatamente por los médicos legistas para que dictaminen, con carácter de provisional, acerca del estado psicológico y físico en que se encuentran. [...]"*

principio IX establece que toda persona privada de libertad tendrá derecho a que se le examine física y psicológicamente inmediatamente después del ingreso al establecimiento de reclusión o de internamiento<sup>40</sup>.

El ingreso y/o internamiento al establecimiento de reclusión en el periodo de preparación de la acción penal dentro del procedimiento ordinario corresponde al Ministerio Público, por tal motivo es que en él recae el ordenamiento del dictamen médico, toda vez que él, al ejercer el control de la detención, puede determinar que ésta fue justificada o injustificada. Si ocurre lo primero tendrá que consignar o retener a la persona hasta por el plazo constitucional<sup>41</sup>, siendo entonces cuando debe de pisar por primera vez un detenido algún centro de reclutamiento y, por ende, practicársele una evaluación médica y psicológica por ser una manera de prevenir violaciones al derecho a la integridad y, consecuentemente, detenciones arbitrarias<sup>42</sup>.

---

<sup>40</sup> Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, apartado 3, principio IX.

*“Toda persona privada de libertad tendrá derecho a que se le practique un examen médico o psicológico, imparcial y confidencial, practicado por personal de salud idóneo inmediatamente después de su ingreso al establecimiento de reclusión o de internamiento, con el fin de constatar su estado de salud físico o mental, y la existencia de cualquier herida, daño corporal o mental; asegurar la identificación y tratamiento de cualquier problema significativo de salud; o para verificar quejas sobre posibles malos tratos o torturas o determinar la necesidad de atención y tratamiento.”*

Se han desarrollado estándares similares en: Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos, párrafo 24; Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, principio 24.

<sup>41</sup> Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 16.

*“[...] Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de cuarenta y ocho horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial; este plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal. [...]”*

Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León, fracción XIII del artículo 23.

*“Artículo 23.- La competencia del Ministerio Público en materia de investigación y persecución de los delitos comprende: [...] XIII.- Ordenar **la detención y, en su caso, la retención de los probables responsables de la comisión de delitos, en las materias de su competencia**, en los términos previstos constitucionalmente y en el Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado.”*

<sup>42</sup> ONU, Subcomité para la Prevención de la Tortura, Informe sobre la visita a México del SPT, CAT/OP/MEX/1, adoptado el 27 de mayo de 2009, párrafos 130 y 131.

*“130. El examen médico y un registro adecuado de las lesiones sufridas por las personas que se encuentran privadas de libertad constituyen una garantía importante para prevenir la tortura y los malos tratos.*

*131. El SPT considera que si una persona privada de libertad recibe malos tratos por la policía, **es comprensible que esa persona tenga temor de informar a alguien acerca de los hechos mientras se***

**c) Conclusiones.** En el presente caso se acreditó la dinámica de hechos expuesta por la víctima. Por tal motivo, será necesario entrar al estudio y análisis del uso de la fuerza para poder determinar si aquél estuvo justificado o injustificado.

Este organismo se percata de que la víctima fue menoscabada cuando la policía ministerial se encontraba ejerciendo su custodia. En el acápite anterior se hizo alusión a la relación de sujeción especial, implicando entonces que la autoridad tenía a su cargo la custodia de la víctima y era garante de todos sus demás derechos, por eso la autoridad debió explicar y justificar convincentemente las lesiones referidas para que fuera exculpada de las mismas, obligación que no fue vista durante la integración del expediente.

El principio de excepcionalidad en el uso de la fuerza precisa que se deben de agotar todos los demás medios para evitar que se ponga en riesgo algún bien jurídico tutelado, v.g. la vida e integridad de cualquier persona o la sustracción de la acción de la justicia, empero por el hecho de que la víctima estuvo custodiada por los elementos ministeriales y, por ende, supeditada su voluntad a la de la autoridad, es inverosímil llegar a creer que alguna persona, incluyendo agentes policiales, pudo haber corrido el riesgo de sufrir menoscabo en su integridad o, peor aún, riesgo de perder la vida; y a pesar de que así hubiera sido, había otros medios, como simples apercebimientos, que tendrían que haberse agotado y fracasado antes del empleo del uso de la fuerza, por eso esta comisión considera injustificado el uso de la fuerza en el presente caso.

Determinado lo anterior, esta comisión analizará los elementos de la tortura y/o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En relación con la intencionalidad, este organismo tiene por claro que los actos fueron con dolo y no como consecuencia de la fortuna o del error. En cuanto a la finalidad, se determina que el menoscabo en la integridad de la víctima, al ser dolosa la acción, fue con la intención de que proporcionará información sobre hechos punibles y de castigar a la víctima por relacionarlo con un grupo delictivo.

En cuanto a la severidad, esta institución considera que, aunado a las consecuencias que lleva la incomunicación prolongada por la demora en la

---

**halle bajo su custodia.** El Estado parte debe ofrecer a toda persona detenida un examen médico apropiado con la menor dilación posible **después de su ingreso en el lugar de detención** [...] El SPT considera que el que un médico examine a personas privadas de libertad sin la presencia de miembros de la policía, podría evitar que los funcionarios recurrieran a prácticas de tortura y malos tratos."

puesta a disposición<sup>43</sup>, el Sr. \*\*\*\*\* sufrió de tratos crueles e inhumanos al ser sometido a golpes con el fin de obtener información y castigarlo por presuntamente estar relacionado con un grupo delictivo; violando así la **fracción II del apartado A del artículo 20** constitucional; artículos **5.1 y 5.2** de la **Convención Americana sobre Derechos Humanos**; artículo **7 del Pacto**

---

<sup>43</sup> Este criterio es coincidente con lo que ha establecido el Poder Judicial de la Federación, v.g:

**"Tipo de documento: Tesis aislada**  
**Novena época**  
**Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito**  
**Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta**  
**Tomo: XXIX, Enero de 2009**  
**Página: 2684**

*DETENCIÓN PROLONGADA. EL HECHO DE QUE LOS AGENTES CAPTORES RETENGAN AL INDICIADO POR MÁS TIEMPO DEL QUE RESULTA RACIONALMENTE NECESARIO, EN ATENCIÓN A LAS CIRCUNSTANCIAS PROPIAS DE LA DISTANCIA Y LA DISPONIBILIDAD DEL TRASLADO GENERA PRESUNCIÓN FUNDADA DE INCOMUNICACIÓN Y AFECTACIÓN PSÍQUICA DEL INculpADO Y, POR ENDE, SU CONFESIÓN MINISTERIAL CARECE DE VALIDEZ. El cuarto párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que en los casos de delito flagrante, cualquier persona puede detener al indiciado poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad inmediata y ésta, con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Tal previsión implica la existencia de una garantía de inmediatez en la presentación del detenido ante la autoridad tan pronto sea posible, en aras de darle seguridad legal acerca de su situación particular. En ese tenor, si existen datos fehacientes de que los agentes captores retuvieron al indiciado por más tiempo del que resultaba racionalmente necesario, en atención a las circunstancias propias de distancia y disponibilidad de traslado, resulta inconcuso que dicha circunstancia genera presunción fundada de que el detenido estuvo incomunicado y que en ese periodo sufrió afectación psíquica por el estado de incertidumbre en cuanto a su seguridad jurídica y personal, dada la retención prolongada a la que estuvo sometido, lo que trasciende al estado psico-anímico en el que rindió su declaración ministerial y, por ende, su confesión respecto de los hechos que se le imputan carecerá de validez.*

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.

*Amparo directo 318/2005. 22 de febrero de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Gilberto Díaz Ortiz. Secretario: Salomón Zenteno Urbina.*

*Amparo directo 397/2007. 20 de diciembre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Arteaga Álvarez. Secretario: José Martín Lázaro Vázquez.*

*Amparo directo 150/2008. 23 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Artemio Maldonado Cruz, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: María Mayela Burguete Brindis."*

Por otro lado la Corte Interamericana se ha pronunciado en el mismo sentido. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007, párrafo 171.

*"171. Asimismo, la Corte ha establecido que el 'aislamiento prolongado y la incomunicación coactiva son, por sí mismos, tratamientos crueles e inhumanos, lesivos de la integridad psíquica y moral de la persona y del derecho al respeto de la dignidad inherente al ser humano [...]".*

**Internacional de Derechos Civiles y Políticos**, artículo 2 y 5 de la **Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura**; artículo 1.1 y 16.1 de la **Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Cruels, Inhumanos o Degradantes**; en relación con los artículos 1 y 133 de la **Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**.

En cuanto a la elaboración del dictamen médico, si bien es cierto que a la policía ministerial no le corresponde, al menos de forma inmediata, la gestión del mismo, también lo es que es obligación de aquella poner a los detenidos lo más pronto posible con quien puede ejercer el control de la detención, en este caso el **Agente del Ministerio Público Investigador Número Dos del Quinto Distrito Judicial en el Estado** que, como ya se refirió, es quien puede y debe ordenar, en su caso, la retención de la víctima y su dictamen médico.

Esta comisión hace hincapié en que la autoridad no rindió informe y, por ende, no hay constancia del informe policial homologado ni del cumplimiento de la obligación positiva de describir el estado físico aparente del detenido, misma que, por su analogía con el dictamen médico que el Ministerio Público debe ordenar, tiene como finalidad prevenir la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Por eso, la falta de remisión sin demora llevada a cabo por los agentes aprehensores y la falta del Informe Policial Homologado expusieron a la víctima a una afectación a su integridad personal, como efectivamente ocurrió en el presente caso, y, por ende, no cumplió con la obligación positiva de prevenir la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes. Por tal motivo se estima que la policía ministerial violó la integridad personal del Sr. \*\*\*\*\*, violando así los artículos 5.1 y 5.2 de la **Convención Americana sobre Derechos Humanos**; artículo 1 de la **Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura**; artículo 2.1 de la **Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Cruels, Inhumanos o Degradantes**; en relación con los artículos 1 y 133 de la **Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**.

**Cuarta.** Esta **Comisión Estatal** advierte que, en el ejercicio de sus funciones, los elementos de la **Policía Ministerial de la Agencia Estatal de Investigaciones**, servidores públicos \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\* y \*\*\*\*\*<sup>44</sup>, cometieron diversas irregularidades que se redujeron en una **Prestación indebida del**

---

<sup>44</sup> En el penúltimo párrafo del informe que rindió el Dte. \*\*\*\*\* al **Agente del Ministerio Público en Turno del Quinto Judicial en el Estado** el 26-veintiséis de abril de 2012-dos mil doce, se asentó:

*"Investigación realizada por los agentes de nombre \*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* y \*\*\*\*\*."*

**servicio público** al haberse comprobado la conculcación a los derechos de **libertad y seguridad personales por detención arbitraria, integridad personal por tratos crueles e inhumanos y, por ende, a la seguridad jurídica de la víctima.**

Las conductas de los servidores actualizan<sup>45</sup> las **fracciones I, V, XXII, LV, LVIII y LX del artículo 50** de la **Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios de Nuevo León**, ya que omitieron cumplir con la máxima diligencia el servicio que les fue encomendado, ejecutando actos arbitrarios en detrimento del respeto a los derechos humanos.

Asimismo, dichos actos y omisiones no encuadran en los principios que rigen la función policial, los cuales son la legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los Derechos humanos reconocidos en la Constitución, últimos que, según el artículo 1 constitucional, son los reconocidos en la Carta Magna y en los tratados internacionales que se deberán respetar, proteger y garantizar conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad<sup>46</sup>.

---

<sup>45</sup> Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios de Nuevo León, artículo 50, fracciones I, V, XXII, LV, LVIII y LX.

*“Artículo 50 Todo servidor público incurrirá en responsabilidad administrativa cuando incumpla con las siguientes obligaciones generales de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones: I. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión; [...] V. Observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión, tratando con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas con las que tenga relación con motivo de éste; [...] XXII. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servicio público; [...] LV. Abstenerse de ejecutar cualquier acto arbitrario y atentatorio a los derechos garantizados tanto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como por la Constitución Local, debiendo conducirse siempre con apego al orden jurídico y respeto a los derechos humanos; [...] LVIII. Abstenerse en todo momento y bajo cualquier circunstancia de infligir, tolerar o permitir actos de tortura u otros tratos de sanciones crueles, inhumanos o degradantes, aún cuando se trate de una orden superior o se argumenten circunstancias especiales, tales como amenaza a la seguridad pública, urgencia de las investigaciones o cualquier otra; al conocimiento de ello, deberá denunciarlo inmediatamente ante la autoridad competente; [...] LX. Observar en las funciones de seguridad pública, tránsito, administración y procuración de justicia, el cuidado de la vida e integridad física de las personas detenidas en tanto se ponen a disposición de la autoridad competente, así como atender con la diligencia encomendada, en operativos de coordinación con otras autoridades, y brindarles en su caso, el apoyo que conforme a derecho proceda; [...]”.*

<sup>46</sup> Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 21 y 1.

*“Artículo 21º [...]La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.”.*

**Quinta.** Una de las consecuencias de las violaciones a los derechos humanos es la obligación de reparar los daños que ocasionaron, ello conforme a las disposiciones internacionales en materia de derechos humanos, así como en la normativa nacional y local.

En un Estado de Derecho el gobernado debe tener la seguridad jurídica de que, en caso de sufrir una violación a los derechos humanos que tenga como consecuencia una afectación, material o inmaterial, pueda reclamarla a la autoridad.

Las recomendaciones que emiten los organismos públicos de derechos humanos, tienen como objetivo buscar que se tomen medidas para la efectiva restitución de los afectados en sus derechos fundamentales y, en su caso, la reparación de daños y perjuicios que se hubiesen ocasionado<sup>47</sup>.

El **artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**, establece la obligación de las autoridades de reparar el daño en materia de derechos humanos. En su párrafo tercero menciona:

*“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y **reparar** las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.”*

---

*“Artículo 1º. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta institución establece.*

*[...]*

*Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.”*

<sup>47</sup> Ley que crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos, art. 45.

*“Una vez concluida la investigación dirigida por el Visitador, éste formulará un proyecto de recomendación [...] a fin de determinar si las autoridades y servidores públicos contra los cuales se han presentado las quejas, han violado los derechos humanos de los afectados, al haber incurrido en actos u omisiones ilegales, irrazonables, injustos, inadecuados o erróneos, o hubiesen dejado sin respuesta las solicitudes presentadas por los interesados durante un período que exceda notoriamente los plazos fijados por las leyes. En dicho proyecto se señalarán las medidas que deban tomarse **para la efectiva restitución de los afectados en sus derechos fundamentales** y, en su caso, **la reparación de daños y perjuicios que se hubiesen ocasionado** [...]”.*

Asimismo, el **artículo 113** del citado ordenamiento jurídico<sup>48</sup>, ha recogido de manera expresa como garantía individual la obligación del Estado de reparar a los particulares por los daños o lesiones que éstos sufran con motivo de la actuación administrativa irregular de los servidores públicos. Una actuación administrativa irregular, como en la observación anterior se señaló, es actuar sin apego al orden jurídico y al respeto de los derechos humanos.

Por otro lado, la jurisprudencia de la **Corte Interamericana** ha establecido qué se entiende por reparación, al señalar:

*“41. En primer lugar, resulta útil precisar el vocabulario empleado. La reparación es el término genérico que **comprende las diferentes formas cómo un Estado puede hacer frente a la responsabilidad internacional en que ha incurrido**. Los modos específicos de reparar varían según la lesión producida [...]”*<sup>49</sup>

*“224. La **reparación del daño requiere, siempre que sea posible, la plena restitución (restitutio in integrum)**, que consiste en el restablecimiento de la situación anterior. **De no ser esto posible**, como en el presente caso, [...] **determinar las medidas que garanticen los derechos conculcados, eviten nuevas violaciones y reparen las consecuencias que las infracciones produjeron** [...] El Estado obligado no puede invocar disposiciones de derecho interno para modificar o incumplir la obligación de reparar. [...]*

*225. A través de las reparaciones, **se procura que cesen los efectos de las violaciones perpetradas. Su naturaleza [...] dependen de las características de las violaciones cometidas, del bien jurídico afectado y el daño material e inmaterial ocasionados.** [...]”*<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 113:

*“Artículo 113. Las leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos, determinarán sus obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones; las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran, así como los procedimientos y las autoridades para aplicarlas. Dichas sanciones, además de las que señalen las leyes, consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u omisiones a que se refiere la fracción III del artículo 109, pero que no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados. **La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes”**.*

<sup>49</sup> Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Garrido y Baigorria Vs. Argentina. Sentencia de 27 de agosto de 1998. Reparaciones y Costas. Párrafo 41.

<sup>50</sup> Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Tibi Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Septiembre 7 de 2004, párrafos 224 y 225.

La reparación, como se desprende de las anteriores citas, tiene la finalidad de promover la justicia y remediar las violaciones a derechos humanos. En el caso que nos ocupa, es imposible devolver las cosas al estado en que se encontraban antes de que se violaran los derechos humanos de la víctima. Por eso es necesario buscar una diversa forma de reparación que, la **Corte Interamericana** y los **Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones**, han señalado las de: indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.<sup>51</sup> Sin implicar que sólo estas medidas podrá recomendar este organismo, se considera necesario ahondar en lo siguiente:

## 1. Indemnización

Los **Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones**, establecen en su **apartado 20**, tal y como ya se refirió que la Corte señala, que la indemnización variará dependiendo de la circunstancias y consecuencias de las violaciones<sup>52</sup>.

---

<sup>51</sup> O.N.U. Asamblea General. Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. A/RES/60/147. Diciembre 16 de 2005, principio 18.

*"18. Conforme al derecho interno y al derecho internacional, y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso, se debería dar a las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, una reparación plena y efectiva, según se indica en los principios 19 a 23, en las formas siguientes: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición."*

<sup>52</sup> O.N.U. Asamblea General. Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. A/RES/60/147. Diciembre 16 de 2005, principio 20.

*"20. La indemnización ha de concederse, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, por todos los perjuicios económicamente evaluables que sean consecuencia de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o de violaciones graves del derecho internacional humanitario, tales como los siguientes: a) El daño físico o mental; b) La pérdida de oportunidades, en particular las de empleo, educación y prestaciones sociales; c) Los daños materiales y la pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante; d) Los perjuicios morales; e) Los gastos de asistencia jurídica o de expertos, medicamentos y servicios médicos y servicios psicológicos y sociales."*

## 2. Medidas de satisfacción.

Los **Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones**, establecen en su **apartado 22 f)** la aplicación de medidas eficaces para conseguir que no continúen las violaciones, así como las sanciones judiciales y administrativas a los responsables de las violaciones, como medidas para satisfacer las violaciones de derechos humanos<sup>53</sup>.

La **Corte Interamericana de Derechos Humanos** ha dispuesto que, de acuerdo con la normativa disciplinaria pertinente, el Estado debe examinar las eventuales irregularidades procesales e investigativas relacionadas con los casos concretos<sup>54</sup>, como son en el particular las violaciones a derechos humanos del **Sr. \*\*\*\*\***.

## 3. Medidas de no repetición.

Los **Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones**, enuncian en su **apartado 23** las medidas de no repetición que son todas aquellas garantías que permiten, en lo posible, prevenir que se vuelvan a cometer violaciones similares en un futuro. Estas medidas pueden incluir reformas legislativas, medidas educativas y de capacitación, mecanismos de vigilancia y supervisión, entre otros.<sup>55</sup>

En razón de todo lo antes expuesto, al haber quedado demostrado con las evidencias relacionadas y debidamente valoradas, conforme a lo establecido en los **artículos 41 y 42** de la **Ley que crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos**<sup>56</sup>, que se cometieron violaciones a los derechos humanos

---

<sup>53</sup> O.N.U. Asamblea General. Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. A/RES/60/147. Diciembre 16 de 2005, principio 22.

<sup>54</sup> Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Familia Barrios Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Noviembre 24 de 2011, párrafo 325.

<sup>55</sup> O.N.U. Asamblea General. Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. A/RES/60/147. Diciembre 16 de 2005, principio 23 b) y e).

<sup>56</sup> Ley que crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos, artículos 41 y 42.

del Sr. \*\*\*\*\* por parte de los elementos anteriormente señalados de la **Policía Ministerial de la Agencia Estatal de Investigaciones, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado**, esta **Comisión Estatal de Derechos Humanos** se permite formular las siguientes:

## V. RECOMENDACIONES

### Al Procurador General de Justicia del Estado:

**Primera.** Se repare el daño al Sr. \*\*\*\*\* por las violaciones a derechos humanos que sufrió con base y de acuerdo a los estándares internacionales señalados en la presente recomendación, considerando que esta resolución constituye un elemento de las reparaciones a las que tiene derecho.

**Segunda.** Instruya al **Órgano de Control Interno** de la dependencia a su cargo, a efecto de que se inicie el procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de los servidores públicos \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\* y \*\*\*\*\*, al haber incurrido respectivamente en la violación a lo dispuesto en las **fracciones I, V, XXII, LV, LVIII y LX del artículo 50 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León**, pues, en los términos expresados en el capítulo de observaciones de esta resolución, **violaron los derechos a la libertad y seguridad personales por detención arbitraria, integridad personal por tratos crueles e inhumanos y seguridad jurídica del Sr. \*\*\*\*\*.**

**Tercera.** De conformidad con **los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 25 de la Local y 1, 2 y 3 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado**, se inicie por los hechos referidos una averiguación previa por parte del **Agente del Ministerio Público Especializado del Fuero Común para Delitos Electorales y de Servidores Públicos**, en donde se garantice el derecho al debido proceso a las partes involucradas.

---

*"Artículo 41.- Las pruebas que se presenten, tanto por los interesados como por las autoridades o servidores públicos a los que se imputen las violaciones, o bien que la Comisión requiera y recabe de oficio, serán valoradas en su conjunto por el Visitador, de acuerdo con los principios de la lógica y de la experiencia, a fin de que puedan producir convicción sobre los hechos denunciados o reclamados.*

*Artículo 42.- Las conclusiones, que serán la base de las recomendaciones, estarán fundamentadas, exclusivamente en la documentación y pruebas que obren en el expediente."*

**Cuarta.** Se le brinde al afectado la atención médica y psicológica que requiera, en relación con las violaciones a sus derechos a la integridad y seguridad personales.

**Quinta.** Con el fin de desarrollar la profesionalización, se brinde capacitación en materia de derechos humanos, en especial sobre el derecho a la integridad y el debido uso de la fuerza pública, incluyéndose los temas relativos: a la conducta de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, al empleo de la fuerza y la protección de las personas sometidas a detención o prisión; lo anterior se deberá aplicar a todo el personal operativo de la **Agencia Estatal de Investigaciones**.

De conformidad con el **artículo 46 de la Ley que crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León**, se hace de su conocimiento que una vez recibida la presente Recomendación, dispone del término de **10-diez días hábiles**, contados a partir del siguiente a su notificación, a fin de informar si se acepta o no la misma. En el entendido de que, **de no ser aceptada o cumplida la recomendación, deberá fundar, motivar y hacer pública su negativa**.

Quedando este organismo en la facultad de solicitar al **H. Congreso del Estado**, que llame a esa autoridad a su digno cargo, para que comparezca ante ese órgano legislativo, a efecto de que explique el motivo de su negativa o incumplimiento, además de que se hará pública la misma.

En caso de ser aceptada, dispondrá de un plazo de **10-diez días adicionales**, contados a partir del siguiente a que se haga del conocimiento de este organismo la aceptación, a fin de remitir las pruebas correspondientes de que se ha cumplido con lo recomendado.

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los **artículos 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 87 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 3, 6 fracciones I, II, IV, 15 fracción VII, 45, 46 de la Ley que crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos; y 12, 13, 14, 15, 90, 91, 93 de su Reglamento Interno**. Notifíquese. Así lo resuelve y firma la **C. Lic. Minerva E. Martínez Garza, Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León. Conste.**

L'JHCD/L'SAMS